ÍNDICE

CONTENIDO DE LA VERSIÓN TAQUIGRÁFICA DE LA SESIÓN PÚBLICA ORDINARIA DEL PLENO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, CELEBRADA EL LUNES 8 DE MAYO DE 2017

SECRETARÍA GENERAL DE ACUERDOS

NÚMERO	ASUNTO	IDENTIFICACIÓN, DEBATE Y RESOLUCIÓN. PÁGINAS.
60/2016	<p>ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD PROMOVIDA POR EL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS, DEMANDANDO LA INVALIDEZ DE LOS ARTÍCULOS 72, FRACCIÓN II, INCISO A), 119, FRACCIÓN XI, Y 122, DE LA LEY NACIONAL DEL SISTEMA INTEGRAL DE JUSTICIA PENAL PARA ADOLESCENTES.</p> <p>(BAJO LA PONENCIA DEL SEÑOR MINISTRO FRANCO GONZALEZ SALAS)</p>	3 A41 EN LISTA

SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

TRIBUNAL PLENO

**SESIÓN PÚBLICA ORDINARIA DEL PLENO DE LA SUPREMA
CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, CELEBRADA EL
LUNES 8 DE MAYO DE 2017**

ASISTENCIA:

PRESIDENTE: SEÑOR MINISTRO:

LUIS MARÍA AGUILAR MORALES

SEÑORES MINISTROS:

**ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA
JOSÉ RAMÓN COSSÍO DÍAZ
MARGARITA BEATRIZ LUNA RAMOS
JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS
ARTURO ZALDÍVAR LELO DE LARREA
JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO
NORMA LUCIA PIÑA HERNÁNDEZ
EDUARDO MEDINA MORA I.
JAVIER LAYNEZ POTISEK
ALBERTO PÉREZ DAYÁN**

(SE INICIÓ LA SESIÓN A LAS 11:50 HORAS)

SEÑOR MINISTRO PRESIDENTE: Se abre la sesión. Señor secretario, denos cuenta por favor.

SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS: Sí señor Ministro Presidente. Se somete a su consideración el proyecto de acta de la sesión pública número 37 ordinaria, celebrada el jueves cuatro de mayo del año en curso.

SEÑOR MINISTRO PRESIDENTE: Señoras Ministras, señores Ministros, está a su consideración el acta. ¿Alguna observación? Si no hay, ¿en votación económica se aprueba? (**VOTACIÓN FAVORABLE**).

QUEDA APROBADA EL ACTA.

Continuamos, señor secretario.

SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS: Sí señor Ministro Presidente. Se somete a su consideración el proyecto relativo a la

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 60/2016, PROMOVIDA POR EL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS, DEMANDANDO LA INVALIDEZ DE LOS ARTÍCULOS 72, FRACCIÓN II, INCISO A), 119, FRACCIÓN XI, Y 122 DE LA LEY NACIONAL DEL SISTEMA INTEGRAL DE JUSTICIA PENAL PARA ADOLESCENTES.

Bajo la ponencia del señor Ministro Franco González Salas y conforme a los puntos resolutivos a los que se dio lectura en sesión anterior.

SEÑOR MINISTRO PRESIDENTE: Gracias señor secretario. El señor Ministro Franco hizo una presentación de los temas del considerando quinto, que se divide en tres apartados, y una breve presentación del considerando sexto. Si no tienen inconveniente, vamos a centrarnos en el considerando quinto y sus tres apartados que se mencionan ahí. Para ello, le doy la palabra al señor Ministro Laynez.

SEÑOR MINISTRO LAYNEZ POTISEK: Muchas gracias señor Ministro Presidente. No tuve la posibilidad de pronunciar el sentido de mi voto en la sesión pasada; hoy lo quiero hacer y vengo a favor del proyecto en este punto.

Fundamentalmente, consiste en dilucidar si el internamiento preventivo o provisional a que hace referencia la Ley Nacional del

Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes es o no constitucional. En mi punto de vista, creo que es constitucional porque no debemos partir de la lectura aislada del artículo 18, y los argumentos fundamentales que vi es que del artículo 18 la palabra “internamiento” tendríamos que entenderla únicamente en la parte de sanción como sanción y que, por lo tanto, al no estar el internamiento provisional en el artículo 18, entonces esto es inconstitucional.

Lo digo con mucho respeto para quien así se ha manifestado: no es correcta esta interpretación. El artículo 18 constitucional es cierto que mandata a la Federación y a las entidades federativas para que establezcan un sistema integral de justicia para los adolescentes, y nos dice: “será aplicable a quienes se atribuya la comisión o participación en un hecho que la ley señale como delito y tengan entre doce años cumplidos y menos de dieciocho años de edad”.

A partir de ahí, lo que hace el artículo 18 es dar una serie de principios y de valores, pero no fija medidas precautorias específicas o normas procesales que tenga que recoger forzosamente ese sistema; nos dice que la operación de este sistema estará a cargo de instituciones, tribunales especializados en la procuración e impartición de justicia; nos dice que las formas alternativas deben observarse en aplicación del sistema, nos dice que el sistema tendrá que ser acusatorio y oral, en fin.

Las medidas que se toman dentro del sistema deben “ser proporcionales al hecho realizado y tendrán como fin la reinserción y la reintegración social y familiar del adolescente”; desde luego, habla del internamiento como medida extrema por el tiempo breve que proceda. Ahí estoy de acuerdo que –incluso– se pudiera pensar que –aquí– el internamiento se refiere al

internamiento como sanción y no forzosamente a otro internamiento.

Pero mi punto de vista: de ninguna parte podemos desprender que no aplique el artículo 19, el artículo 20 y los demás artículos constitucionales que aplican con los matices específicos o con los valores y principios que mandata el artículo 18 para la justicia para adolescentes. Tan es así que el propio artículo 18, –por ejemplo– nos dice: “en materia de justicia para adolescentes será acusatorio y oral”. El artículo 20 constitucional dice: “El proceso penal será acusatorio y oral”. Y luego, aquí viene toda una serie de reglas, de derechos y de reglas procesales que tienen que aplicar en nuestro sistema acusatorio. Mi pregunta es ¿no aplican esas reglas al sistema de justicia penal para adolescentes? Creo que aplica, mientras se compagine tanto lo que dice el artículo 18 como lo que dice el 19, el 20 y demás artículos constitucionales que tengan implicaciones en el sistema de justicia para adolescentes.

Entonces, si en realidad el artículo 18 no prohíbe el internamiento provisional pero, conforme a los artículos 19 y 20, está la figura de prisión preventiva, me pregunto ¿por qué no aplicaría una retención de manera provisional para una justicia para adolescentes a alguien que ha delinquido entre los catorce y menos de dieciocho años en un delito de tal magnitud, de tal gravedad que tenga que ser –por lo pronto– ingresado en un centro especializado?, siempre y cuando se cumpla lo que dice el artículo 18: “estará a cargo de instituciones, tribunales y autoridades especializados en la procuración e impartición de justicia para adolescentes”.

Hay que recordar que la propia ley nos viene diciendo cuándo aplica la figura que llama internamiento, con desorden —y ahorita

voy hacia allá— lo hace de manera desordenada porque mezcla la locución prisión preventiva con internamiento provisional, de lo cual también se ocupa el proyecto.

Pero desde el momento en que la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes nos dice que no puede exceder de cinco meses, nos dice que es revisable mensualmente, nos dice que es una medida excepcional, hay un artículo expreso que nos dice: antes de imponer esta medida, juez, tienes que —además— razonar por qué ninguna de las demás medidas precautorias que están en el artículo 119 es aplicable para el caso. Es decir, la ley cubre uno de los principios del artículo 18, que es la excepcionalidad de este tipo de medidas y el matiz que se tiene que hacer con base en la justicia para adolescentes.

Si a ello agregamos que convencionalmente los tratados en materia de derechos humanos —como bien lo expresó aquí el Ministro Arturo Zaldívar— no proscriben tampoco esta medida en justicia para adolescentes; entonces, no veo por qué se declararía inconstitucional esta medida en tratándose del sistema especializado.

Por eso, en este punto, estoy de acuerdo con el proyecto, en el sentido de que este internamiento, —insisto— no pretendiendo desprender forzosamente la palabra “internamiento” del artículo 18, sino visto en su conjunto, y si aceptamos la idea de que el artículo 18 no trae mayores parámetros del sistema de justicia penal tiene que aplicar el artículo 19 y tiene que aplicar el artículo 20, matizado y en lo conducente.

Por eso, —para mí— no veo argumentos para negar el que pueda existir esta figura y menos de la manera en que la Ley

Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes lo hizo, —de veras— con excepcionalidad, con límites específicos y con obligación de revisar la medida mensualmente, entre otros muchos aspectos que realiza. Por lo tanto, en este punto estoy de acuerdo.

Ahora, el proyecto nos propone, —y también coincido— en la parte de seguridad jurídica, porque el proyecto dice: finalmente, es una cuestión de inseguridad el que, por un desorden legislativo —y lo digo con el mayor respeto al Congreso— pero haya hablado de las dos figuras, —como lo dice el proyecto— donde se puede entonces prestar que vayan a aplicar principios de la prisión preventiva para adultos; lo pertinente, lo razonable para garantizar la constitucionalidad de esta norma es suprimir las porciones normativas que hablan de prisión preventiva y dejar el internamiento provisional como está establecido en el proyecto. Por estas razones, en el considerando quinto vendría con el proyecto. Gracias.

SEÑOR MINISTRO PRESIDENTE: Gracias señor Ministro. Señor Ministro Pardo.

SEÑOR MINISTRO PARDO REBOLLEDO: Muchas gracias señor Ministro Presidente. Señoras y señores Ministros, me voy a referir al considerando quinto del proyecto, en sus tres subdivisiones.

En primer término, manifiesto que estoy de acuerdo con la propuesta del proyecto en el primer apartado de este considerando quinto, en donde se da respuesta a —fundamentalmente— tres argumentos de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Estoy en la página 31 del proyecto

donde se hace la síntesis de estos tres planteamientos de invalidez.

El primero dice que, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos alega: “El hecho de prever la prisión preventiva para los adolescentes se aparta del sistema constitucional de justicia para adolescentes, además de que es contraria a la libertad personal y al principio de presunción de inocencia.”

El siguiente planteamiento consiste en que: “El internamiento preventivo al compartir la misma naturaleza que la prisión preventiva, y adicionalmente prever la prisión preventiva como tal, genera una transgresión a los derechos de los adolescentes en el sistema de justicia previsto en el artículo 18 constitucional.”

Finalmente, el tercer planteamiento que se aborda en esta parte del proyecto dice: “En el texto de las disposiciones impugnadas se confunden los términos de internamiento, internamiento preventivo y prisión preventiva.”

En este aspecto, comparto la propuesta del proyecto desde la perspectiva en que el proyecto nos dice: la circunstancia de que el legislador haya utilizado el concepto “prisión preventiva” no tiene como consecuencia el que, en el sistema para adolescentes, se puedan aplicar las normas de la prisión preventiva en un juicio penal para personas adultas.

Nos explica el proyecto –y nos hacía referencia el señor Ministro ponente en su presentación– que hubo varias iniciativas en este tema, y que algunas mantenían la denominación de “prisión preventiva” y otras proponían esta distinta de “internamiento preventivo”; pero la conclusión a la que llega el proyecto –y que comparto–; no es que por utilizar la expresión “prisión preventiva”

se esté haciendo una excepción al sistema de justicia para adolescentes, sino que, cuando se utiliza “prisión preventiva” debe entenderse, en primer lugar, que es una prisión preventiva distinta de la que se utiliza para adultos en el proceso penal respectivo; y esto se corrobora con la propia lectura de las disposiciones impugnadas en este apartado, en donde a esa llamada “prisión preventiva” se le pone un límite máximo de duración, se pone la obligación de estarla revisando periódicamente, se establece en la ley que esa medida cautelar debe ser de *ultima ratio*, es decir, debe ser la medida más grave y, si hay algunas de menor intensidad que deban usarse, deberán preferirse; ésta tendría que ser como la última instancia.

Se llega a la conclusión de que “prisión preventiva” debemos entenderlo como “internamiento preventivo” y que el hecho de que se utilice esa expresión no quiere decir que se esté aplicando a los adolescentes el sistema penal para adultos, para decirlo en pocas palabras; claro, el proyecto lo hace de manera mucho más clara y desarrollada.

En este punto estoy de acuerdo con el proyecto, me parece adecuada la conclusión y estimo –como creo que concluye esta parte del proyecto– que la circunstancia de que se utilice “prisión preventiva” no genera un régimen confuso para los adolescentes en donde se pueda aplicar esta medida de prisión preventiva para adultos-adolescentes. No es así, la ley lo aclara y, finalmente, se establece que deben tomarse como conceptos sinónimos, pero ubicado en el contexto del sistema especial para adolescentes, con las restricciones y las limitaciones que marca la propia ley. Así es que en este punto estoy de acuerdo.

El siguiente apartado es propiamente el análisis de la constitucionalidad de la medida del internamiento preventivo para

adolescentes y, en ese aspecto, comparto la conclusión a la que llega el proyecto; sin embargo, encontraría el asidero constitucional con algunas argumentaciones adicionales, muy en la línea de lo que señalaba –hace un momento– el Ministro Laynez.

Cuando leemos el artículo 18, en su párrafo cuarto, que es el que hace referencia concretamente a este sistema para adolescentes, en la parte que interesa dice: “Este sistema garantizará los derechos humanos que reconoce la Constitución para toda persona, así como aquellos derechos específicos que por su condición de personas en desarrollo les han sido reconocidos a los adolescentes”.

Como se señalaba hace un momento, –desde mi punto de vista– nos lleva a la conclusión de que no podemos leer el artículo 18 aislado del resto del contexto constitucional relativo a personas que pudieran estar sujetas a un procedimiento penal. Claro, cuando se trata de adolescentes, lo que mandata la Carta Magna es que debe ser un sistema especial, debe ser un sistema integral y, desde luego, se señala también que debe aplicarse este sistema a los adolescentes o a los niños que van de doce hasta antes de dieciocho años; pero si el argumento que se ha expresado en este Tribunal Pleno, respecto de que este artículo 18 no autoriza expresamente la prisión preventiva o el internamiento preventivo para los adolescentes dentro de su sistema, creo que sería mucho exigirle al Constituyente Permanente que hubiera desarrollado en este artículo 18 todas las formalidades, lineamientos, posibilidades y variaciones relativas con el sistema de justicia para adolescentes; si interpretamos este párrafo aisladamente podríamos decir que aquí no está previsto que un adolescente pudiera ser detenido en casos de flagrancia, –por ejemplo– que es un precepto distinto de

la Constitución, no podríamos aplicarle las disposiciones relativas a que debe de haber un plazo para resolver su situación jurídica, no podríamos establecer que podría ser privado de su libertad en determinadas condiciones cuando hubiera un caso urgente, en fin; creo que –desde mi punto de vista y, desde luego, respetando las opiniones que se han vertido en contrario– no podemos exigirle a este artículo 18 que nos desarrolle en su integridad todas las formalidades, todos los derechos y todas las posibilidades que puedan darse dentro del sistema de justicia para adolescentes; desde esta perspectiva y haciendo referencia al artículo 18 que leí, me parece que la prisión preventiva o el internamiento preventivo, tratándose del sistema de justicia para adolescentes tiene sustento constitucional, tomando en cuenta el propio artículo 18, en su párrafo cuarto, vinculado –desde luego– con el artículo 20, apartado B, fracción IX, en donde se establecen los derechos de toda persona imputada, y se señala, segundo párrafo: “La prisión preventiva no podrá exceder del tiempo que como máximo de pena fije la ley al delito que motivare el proceso”, y también me parece que en una interpretación sistemática podría vincularse con lo que establece el artículo 20 constitucional, apartado C, que habla “De los derechos de la víctima o del ofendido”, y que en su fracción VI establece como uno de estos derechos “Solicitar las medidas cautelares y providencias necesarias para la protección y restitución de sus derechos”.

El artículo que se cuestiona y que justifica el internamiento preventivo para adolescentes, en la ley que ahora se analiza, es el artículo 122, que dispone: “Reglas para la imposición del internamiento preventivo. A ninguna persona adolescente menor de catorce años le podrá ser impuesta la medida cautelar de prisión preventiva”. Esa es una restricción adecuada al sistema

de justicia para adolescentes que lo diferencia de la prisión preventiva en general para adultos.

Y continúa: “A las personas adolescentes mayores de catorce años, les será impuesta la medida cautelar de internamiento preventivo, de manera excepcional y sólo por los delitos que ameriten medida de sanción de internamiento de conformidad con lo dispuesto en esta Ley y únicamente cuando otras medidas cautelares no sean suficientes para garantizar la comparecencia de la persona adolescente en el juicio o en el desarrollo de la investigación, la protección de la víctima, o de los testigos o de la comunidad”.

Esta medida cautelar, entonces, por disposición expresa de la ley que analizamos ¿es excepcional? ¿Se tiene que aplicar únicamente cuando otras medidas nos sean suficientes para el fin que se propone? Y tiene como justificación garantizar la comparecencia del adolescente en el proceso respectivo, el desarrollo de la investigación, la protección de la víctima o de los testigos o de la comunidad.

Así que me parece que esta medida, si bien restrictiva de libertad, estimo que tiene asidero constitucional, vinculando el 18, en la medida en que hace referencia a todo el sistema que desarrolla la Constitución para las personas que son sujetas a un procedimiento de este tipo, se puede vincular con el propio 19, se puede vincular con el 20, apartado B, fracción IX, y con el 20, apartado C, fracción VI, justificando de esa manera el sustento constitucional.

Y la justificación, más allá del texto que le diera fundamento en la Carta Magna, pues es —precisamente— tratar de lograr este equilibrio entre los derechos —por una parte— de la persona —en

este caso— adolescente que está sujeta a un procedimiento, donde se analiza su probable responsabilidad en la comisión de un hecho que la ley califica como delito, y lograr un equilibrio efectivo también con los intereses de la víctima o incluso de la sociedad que —desde luego— deben ser atendidos por disposición constitucional expresa.

Además, estimo que esta medida —en algunos casos— también puede ser por la propia seguridad e integridad del adolescente que está involucrado en una conducta de este tipo.

No es desconocido para nosotros —lo vemos en los medios de comunicación— que, con frecuencia, la delincuencia organizada utiliza a menores de edad en algunas de las conductas ilícitas que lleva a cabo y, en esta medida, entiendo también que, en su caso, cuando se justifique como medida excepcional y como última *ratio* la medida de internamiento provisional, tiende a la protección de la integridad —incluso— física de ese adolescente que, por muy diversas razones, se puede haber involucrado en la comisión de ese tipo de delitos, a veces sumamente graves e impactantes para la sociedad.

Por tanto, mi conclusión sería que tiene justificación constitucional la medida. Haría mi argumentación desde este planteamiento que hago aquí, no necesariamente de la manera como se desarrolla en el proyecto, pero llego a la misma conclusión.

Finalmente, en relación con el tercer apartado de este considerando quinto, en donde se hace el análisis —de nueva cuenta— de la utilización de la expresión “prisión preventiva” en el sistema para adolescentes; me quedaría con el estudio que se hizo de inicio, con la primera parte, en donde se está diciendo

que la utilización de ese concepto no resulta inconstitucional porque la prisión preventiva debe entenderse como internamiento preventivo, y la prisión preventiva tiene —en la propia ley y por disposición expresa del 18— limitantes y condiciones especiales que lo hace diferente a la prisión preventiva para adultos, por lo que la simple utilización de esa expresión no hace inconstitucional la ley que regula este sistema de justicia para adolescentes.

Creo que si llegamos a esa conclusión, —como se señala en el primer apartado del estudio de este considerando quinto—, pues el análisis que se hace en el tercer apartado quedaría resuelto, —de entrada— porque si decimos que debemos entender que prisión preventiva e internamiento preventivo son sinónimos, y ambos están sujetos a las limitantes y las condiciones que establece el artículo 18 y la ley, no vería razón para —en esta tercera parte— invalidar la porción de muchos artículos en donde se utiliza la expresión “prisión preventiva”; me quedaría con el estudio inicial y, con ello, desestimaría esta última parte, diciendo que no se genera incertidumbre o inseguridad jurídica porque dijimos que la prisión preventiva y el internamiento preventivo para adolescentes deben ser ajustados al sistema integral con las medidas y las limitaciones que se dan para los propios adolescentes.

Así es que, en este tercer apartado, diferiría de la propuesta del proyecto; me parece que, con el análisis que se hace en el primer apartado, resolveríamos los planteamientos de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos sobre la utilización de esta expresión de “prisión preventiva”. Esa sería mi postura respecto de este considerando quinto en sus tres apartados. Gracias señor Ministro Presidente.

SEÑOR MINISTRO PRESIDENTE: Gracias señor Ministro. ¿Alguien más, señores Ministros? Señor Ministro Medina Mora.

SEÑOR MINISTRO MEDINA MORA I.: Gracias señor Ministro Presidente. En la sesión anterior, tuve la oportunidad de posicionarme con respecto al apartado A, es decir, a la inclusión de la prisión preventiva como medida cautelar; me manifesté de acuerdo con el proyecto planteando –al final– esta confusión, que me parece se relaciona también con el apartado C, como lo expresó hace un momento el Ministro Pardo.

Con respecto a la constitucionalidad de internamiento preventivo en relación con el régimen aplicable a la justicia de adolescentes –o sea, el apartado B– coincido con lo que se plantea en el proyecto, así como con lo que expresó el Ministro Zaldívar en nuestra sesión anterior, en cuanto a que esta figura tiene un claro sustento en la Convención sobre los Derechos del Niño, que se ubica en el marco de regularidad constitucional junto con nuestra Carta Magna, en parte de su contenido. Considero, además, que no existe restricción constitucional aplicable.

Es importante señalar que nuestro Tribunal Pleno, al resolver la acción de inconstitucionalidad 37/2006, por unanimidad –entonces– de diez votos, en la que se realizó un amplio análisis del sistema, estimó que las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para la Administración de la Justicia de Menores (“Reglas de Beijing”) y la convención mencionada, son referentes indispensable para la justicia de menores, y fueron estas normas la base para construir los criterios jurisprudenciales que derivaron del asunto y que son trascendentes en esta materia.

Digo entonces que, si bien las reglas no son propiamente vinculantes, lo cierto es que se trata de un instrumento

internacional, cuya esencia fue recogida en la propia Convención sobre los Derechos del Niño, y en la que se aborda el tema con mayor amplitud, detalle y directrices específicas; de manera que es referente la interpretación del sistema de justicia juvenil y, en el mismo asunto, no sólo no se consideró que el internamiento preventivo no encontrara sustento constitucional, sino que se desarrolló un capítulo sobre la medida, su funcionamiento preciso y principios rectores.

Además de lo anterior, estimo que, en el caso, para decidir qué norma ha de prevalecer, también deben valorarse elementos como son el principio de especialización al que se refiere ampliamente este apartado del proyecto, quinto párrafo, artículo 18 constitucional, y 5, punto 5, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y valorar también los derechos de las víctimas, el de la protección, dada su intervención en el procedimiento como está claramente recogido en la fracción VI del apartado C, del artículo 20 constitucional, y el derecho a que se garantice la administración de justicia en el artículo 17, párrafo segundo, pues estos también tienen rango constitucional.

Por lo anterior, coincido con la propuesta que sostiene que es convencionalmente legítimo que la ley prevea la medida cautelar de internamiento, siempre que se cumplan los requisitos de especialización o modalización, los cuales no llegan al extremo de reconocer un derecho de libertad absoluto en todos los casos, sino que garantiza lineamientos mínimos para la aplicación de la medida, como son: que sean separados de los adultos, que sean llevados ante tribunales especializados, que tengan supervisión periódica, que se garantice su salud, que se implementen programas de educación y, sobre todo, que la medida sea impuesta como último recurso.

Por lo que hace al apartado B o la inconstitucionalidad de las disposiciones que incluyan la referencia a la frase “prisión preventiva”, me aparto de la propuesta del proyecto por razones muy similares a las que expresó el Ministro Pardo.

Como lo había mencionado en la sesión anterior, resulta contradictorio con lo tratado en el mismo –en las páginas 40 en adelante del proyecto–, donde se establece claramente que el legislador no autorizó la imposición de esta medida a los adolescentes, se justifica ampliamente el por qué usó la expresión el legislador ordinario, y se dice que sólo constituye un sinónimo o referencia, consideraciones con la cuales coincido. Aunado a que la invalidez de los preceptos propuestos, principalmente los de invalidez por extensión, eliminaría derechos propios de los adolescentes, y facultades de supervisión y control indispensables para las autoridades, por lo que se perjudicaría a los menores y se crearía un problema administrativo que podría ser grave.

Aunque no hay duda de que este Pleno puede llevar a cabo una invalidez por extensión, sé que no estamos discutiendo todavía ese punto, pero me parece que la referencia es importante, lo cierto es que, en este caso, además de no considerarlo justificado ni necesario, crearía problemas de funcionamiento; por ejemplo, eliminar la expresión “prisión preventiva” del libro primero, título segundo, capítulo segundo, sección segunda, “Derechos de las Personas Adolescentes en Prisión Preventiva o Internamiento”, parecería que no le son aplicables a los menores sujetos a la medida cautelar los derechos contenidos en dicha sección, entre otros, recibir información sobre las medidas disciplinarias que puedan imponérseles y demás derechos y obligaciones: los medios de impugnación procedentes, los

supuestos en que pueden solicitar salir del centro especializado, el derecho a conservar la custodia de sus hijos, etcétera.

También se eliminaría el derecho de los menores de acudir ante el juez de ejecución si no están de acuerdo con el tiempo de internamiento preventivo que les haya sido tomado en cuenta para el cumplimiento de su sanción –el artículo 214–; y la obligación de mantener separados a los adolescentes que están internos preventivamente y los que han sido sentenciados –el 122, párrafo sexto–.

La obligación del ministerio público de justificar ampliamente la necesidad de imponer internamiento preventivo, –el artículo 122, párrafo tercero–, entre otras medidas que resultarían en perjuicio de los menores. Por lo que, en esta parte del proyecto, no coincido. Gracias señor Ministro Presidente.

SEÑOR MINISTRO PRESIDENTE: Gracias señor Ministro. Señora Ministra Luna, por favor.

SEÑORA MINISTRA LUNA RAMOS: Gracias señor Ministro Presidente. En la sesión anterior, manifesté ciertas dudas sobre este primer apartado que estábamos analizando en el considerando quinto del proyecto que nos ha presentado el señor Ministro Fernando Franco.

El análisis constitucional que se hace en los apartados A y en el B, respecto de la libertad personal, la presunción de inocencia y la prisión preventiva, si existe o no violación de esto al artículo 18 constitucional; me parecería que iba más ligado a cuestiones de carácter internacional que a lo que sustenta nuestra propia Constitución. Sin embargo, debo de mencionar que después de

escuchar la opinión de la señora y de los señores Ministros que han participado tanto a favor como en contra del proyecto, me ha servido para normar el criterio, determinar que en estos puntos coincido con la declaración de constitucionalidad que se hace en el proyecto en estos puntos, y voy a dar la razón de por qué llego a esta conclusión.

En primer lugar, quizás las razones por las que arribo a esa conclusión sean diferentes, sean distintas, algunas un poco semejantes a las que acaban de señalar pero, en todo caso, podrían ser motivo de un voto concurrente; en segundo lugar, creo que el artículo 18 constitucional está regulando una situación muy específica del sistema de justicia penal, que es —precisamente— la prisión preventiva; es decir, mientras cualquier persona se encuentra en un procedimiento penal, en un proceso penal, puede o no ser privada de su libertad cuando todavía no tiene una sentencia que así lo determine; es de tal manera grave la conducta que se le achaca que no permita el que se realice el procedimiento o el proceso penal en libertad; eso es lo que nos está regulando el artículo 18 constitucional, y —de manera genérica— en el primer párrafo, lo que nos dice es: “Sólo por delito que merezca pena privativa de libertad habrá lugar a prisión preventiva. El sitio de ésta será distinto del que se destinare para la extinción de las penas y estarán completamente separados.” Y luego empieza a darnos una serie de principios del sistema de justicia penal y, dentro de estos muchos principios, hay párrafos específicos encaminados a la justicia penal para adolescentes, pero —en lo personal— lo que me convence de la constitucionalidad de estos artículos es —precisamente— que el párrafo primero del artículo 18 constitucional está estableciendo la posibilidad de que alguien pueda llevar a cabo un procedimiento penal, en el que esté involucrado, privado de su libertad en ciertas condiciones.

¿Qué es lo que está implicando este artículo o este primer párrafo? Una restricción —precisamente— a la libertad personal, y ¿qué es lo que nos dice? ¿En qué situaciones debe de llevarse a cabo? Pues tanto el artículo 18, el 19 y algunas partes del 20, nos van especificando estas situaciones, pero la parte genérica —para mí— principal y fundamental, el asidero constitucional de la medida cautelar, es el primer párrafo del artículo 18 constitucional, que establece esta posibilidad —de manera genérica— en el procedimiento o en el proceso penal.

Estableciéndose de esa forma, creo que la idea de la lectura de los otros párrafos que —en lo personal— me habían motivado una gran duda, cuando se está analizando lo que nuestro Constituyente está señalando del sistema de justicia penal para adolescentes en concreto.

Ahí lo que diría es: este párrafo cuarto, que se está refiriendo a la justicia penal para adolescentes, nos está dando ciertas excepciones del procedimiento; pero, efectivamente, en ninguna parte de este párrafo se está determinando que existe una prohibición para efectos de que se pueda privar de la libertad a una persona que está siendo sometida a procedimiento; entonces, ¿qué es lo que sucede? En este párrafo cuarto se nos están dando las excepciones del procedimiento a seguir en materia de justicia penal para adolescentes, donde no se contempla la prohibición de que no pueda estar en prisión preventiva un adolescente.

Ahora, estos lineamientos que se nos dan en materia de justicia para adolescentes establecen —incluso— cuestiones de carácter semántico, y creo que esto es lo que motivó en la legislación —que ahora estamos analizando— algunas confusiones.

Efectivamente, existe la diferenciación entre que, para efectos de privación de la libertad, tratándose de libertad como medida cautelar, el artículo 18 —de manera genérica— la establece o lo denomina como prisión preventiva, y para efecto del procedimiento de justicia para adolescentes, esta se reconoce como internamiento preventivo, pero —al final de cuentas— ¿qué es lo que se está reconociendo dentro del artículo 18 constitucional? La posibilidad de que una persona pueda llevar a cabo su proceso penal en internamiento o en prisión preventiva, —precisamente— porque el tipo de delito lo amerita, tal como lo establece el párrafo primero del artículo 18.

Entonces, —por principio de cuentas— el 18 constitucional establece la posibilidad de la prisión preventiva; en la justicia penal para adolescentes, que tiene un régimen de excepción en cuanto a su tramitación, en cuanto a sus sanciones, en cuanto a muchas situaciones del proceso penal, no está limitando la prisión preventiva, pero ella la denomina o la señala como “internamiento”; entonces, no existe prohibición, simplemente es una denominación distinta, pero —de alguna manera— está establecida dentro del sistema penal mexicano, simple y sencillamente no está prohibida para los adolescentes.

Ahora, si además el estimar que la lectura del puro artículo 18 nos determina constitucionalmente la no prohibición de este tipo de internamiento para los adolescentes, entonces, —todavía más— cuando se analizan los otros artículos que se refieren al sistema penal, al que han hecho referencia los Ministros Pardo, Laynez y Medina Mora; los artículos 19 y 20, en los apartados que se han mencionado, el apartado B, fracción IX, párrafo segundo, y en el apartado C, fracción VI, donde se establecen las medidas cautelares, pues se hace una interpretación integral del

sistema dentro del cual podemos entender que también está comprendido el sistema de justicia penal para adolescentes. Sobre esa base, estaría con la declaración de constitucionalidad que el proyecto está determinando en los apartados A y B, –les digo– a lo mejor por razones diferentes o esperando ver el engrose, qué determina el señor Ministro ponente, tomar como argumentaciones para el momento en que éste se presente y con reserva de –a lo mejor– un voto concurrente.

En lo que también me apartaría es en la determinación de inconstitucionalidad de estos preceptos que se manejan en el apartado C, en donde se está determinando que hay una confusión entre el internamiento preventivo y la prisión preventiva, porque –precisamente– la aclaración es que prisión preventiva es medida cautelar, es el género que se da en cualquier proceso penal, incluyendo los de justicia penal para adolescentes; entonces, no tendríamos por qué estimar que motiva confusión y declarar su inconstitucionalidad, cuando estamos entendiendo que la prisión preventiva, en materia de justicia para adolescentes, está referida de manera específica al internamiento preventivo, entonces, no existiría –de ninguna manera– esa confusión.

Entonces, sobre esa base, —y ya para fijar una postura— la ocasión anterior manifesté muy serias dudas que se inclinaban –más que nada– a la determinación de inconstitucionalidad, pero las manifestaba como tales porque era la lectura prácticamente aislada de estos párrafos cuarto y quinto del artículo 18 constitucional, pero creo que la idea fundamental del análisis de un sistema de justicia penal tiene que ser en su integridad y tomando en consideración las excepciones que éste contiene, hasta dónde existe realmente una restricción respecto de ellas y hasta dónde no.

Ahora, es cierto también que en los tratados internacionales —que se han mencionado— se determina —de alguna manera— la posibilidad de que exista una medida cautelar de esta naturaleza para adolescentes; sin embargo, me parece que, si la Constitución —de manera específica— estuviera estableciendo que no existe esta posibilidad para los adolescentes, aunque los tratados internacionales lo estableciera, estaría por su inconstitucionalidad; sin embargo, en la interpretación que se está realizando, —en mi opinión—, primero que nada, del propio artículo 18 constitucional y, por supuesto, relacionado con el 20 y con el 19 —por las razones que se han mencionado—, me parece que no existe una prohibición, sino que es parte del sistema integral y que, como tal, pudiera entenderse que no sería inconstitucional ninguno de estos dos artículos, ni el 72, fracción II, ni el 122, que ahora se están reclamando.

Por otro lado, también —para mí— es muy importante una situación que vale la pena mencionar. El artículo 20 constitucional, en la parte que se ha señalado —ya lo había indicado el señor Ministro Pardo pero vale la pena recalcarlo—, creo que el Nuevo Sistema de Justicia Penal tiene como base el determinar también un reconocimiento que quizás antes no se había hecho —o al menos no de manera tan expresa— a los derechos de las víctimas y a los derechos de la sociedad y, en estos casos, se mantiene ese equilibrio procesal que se busca en el nuevo sistema de justicia a través de la interpretación de estos artículos, pero —insisto, primero que nada— de la interpretación del propio artículo 18, que —como regla general— en el párrafo primero está determinando la posibilidad de una prisión preventiva —en general— para todos, y que puede entenderse en la excepción del proceso penal para los adolescentes como un

internamiento preventivo en los casos que se determina en la propia Constitución.

Por estas razones, estaré de acuerdo con el proyecto que establece el señor Ministro Franco, por lo que se refiere a los apartados A y B en cuanto a su constitucionalidad, separándome de consideraciones o reservándome el derecho de formular un voto concurrente.

Por lo que se refiere al apartado C, estaré en contra, por la declaración —también— de constitucionalidad, por las razones que se han señalado, para evitar una contradicción entre el reconocimiento de que es una interpretación de que para los adultos es prisión preventiva y para los adolescentes es internamiento preventivo, y si se reconoce de esta manera —en mi opinión— no tendría por qué declararse inconstitucional ninguna de estas porciones, sino establecer su interpretación conforme. Gracias señor Ministro Presidente.

SEÑOR MINISTRO PRESIDENTE: Gracias señora Ministra. Señor Ministro Pérez Dayán, por favor.

SEÑOR MINISTRO PÉREZ DAYÁN: Gracias señor Ministro Presidente. Como todos ustedes recordarán, una vez presentado el asunto por el señor Ministro ponente en la sesión anterior a ésta, el pronunciamiento de los Ministros que hicieron uso de la palabra fue en contra del proyecto.

Mi participación se dio después de la intervención de los señores Ministros, quienes no coincidían con el proyecto, pero antes de la aclaración muy pertinente que hiciera el señor Ministro ponente, respecto de la inclusión —en esta discusión— de algún otro aspecto importante que, como concepto de invalidez, esgrimió la

comisión accionante, en la medida en que argumenta que se utiliza indistintamente en el lenguaje normativo la expresión “prisión preventiva” y “medida de internamiento”.

De manera que, si mi participación fue después de quienes expresaron estar en contra, pero antes de que el señor Ministro ponente aclarara exactamente el alcance al que nos llevaría esta primera discusión, me es importante entonces intervenir sólo para fijar postura en cuanto a la segunda situación; esto es, el argumento principal establecido como razón de invalidez, por la comisión, de que se utiliza indistintamente la expresión “prisión preventiva” con “internamiento”, cuando ésta –a juicio de quien promovió la acción– resulta inconstitucional.

Esto es, –en su parecer– ni la prisión preventiva ni el internamiento o como se le quisiera llamar a un equivalente a estar privado de la libertad durante un juicio o procedimiento — según sea el caso— tendría efectos en personas adolescentes, pues es este el argumento de inconstitucionalidad expresado por la accionante.

Para efecto de fijar –entonces– mi posición en el segundo tema, sólo debo mencionar, como preámbulo, el que –mi personal postura respecto del proyecto radicaba en estar de acuerdo con esta primera parte, en donde se considera que la Constitución no excluye la posibilidad de un internamiento tratándose de un adolescente, en tanto éste cumpla con los requisitos que, es decir, el internamiento, no el adolescente, que para tales efectos impone la propia normatividad, trátase de delito grave que, con motivo de lo anterior, se ponga en peligro a la sociedad, se dé pauta o se pueda –de alguna manera– permitir la sustracción del sujeto a la acción de la justicia, muy en consideración al tipo de penas que vienen acompañadas para delitos graves, pero muy

en lo particular y, con ello, quise ser enfático, que uno de los derechos de la víctima es la protección de su integridad y, como sucede en infinidad de casos durante el procedimiento en éstos, la posibilidad de que la víctima pueda ser motivo de afectaciones morales y físicas se incrementa.

Es por ello que manifesté mi opinión favorable respecto de este primer punto, lo que me lleva al segundo, y es que sólo recordando la razón con lo que la comisión combatió —que es uso indistinto—, no estaría de acuerdo con la invalidez de todas las expresiones que en la ley habla de prisión preventiva, pues dándole la razón a la accionante en esta parte —sólo en esta parte— es que se utilizó la expresión como un sinónimo, viene acompañada, en muchas de las hipótesis que se invalidarían, de algunas otras circunstancias favorables —al caso concreto— del internamiento; sólo por citar alguna, se invalidaría bajo la perspectiva del proyecto la fracción VII del artículo 214, sólo por usar la expresión “prisión preventiva”, en donde dice: “El cómputo del tiempo de prisión preventiva para efecto del cumplimiento de la medida de sanción”, como un derecho para la extinción de la medida de sanción; esto es, en términos del artículo 214, el adolescente que fue sujeto a una medida de internamiento, entendida como lo dice la comisión —un sinónimo de prisión preventiva—, tiene derecho a que se haga el cómputo del tiempo en que estuvo privado de la libertad para efectos del cumplimiento de la medida de sanción.

Este es un solo ejemplo de los muchos que se desprenden de los artículos en los que se utiliza la expresión “prisión preventiva”; de anularlas como —de alguna manera entendiendo integralmente el asunto— se propone en el proyecto, muy probablemente también quedarían fuera una gran cantidad de disposiciones favorables y características del procedimiento que se sigue,

tratándose de adolescentes que, sólo por estar vinculado con una expresión “prisión preventiva”, quedarían fuera.

De manera que, frente a una circunstancia como éstas, en donde una decisión —desde luego— soportada con el argumento de que la prisión preventiva, identificada como una medida de internamiento, tiene un error técnico importante, también dejarían de existir beneficios que son muy importantes en el tratamiento diferenciado de los adolescentes frente a los adultos.

De suerte que también soy partidario de que esta Suprema Corte, en busca de preservar los derechos asociados a la expresión “prisión preventiva”, se mantengan —simple y sencillamente— con el razonamiento de que se utilizó como una expresión equivalente. Pienso que sólo por querer quitar del texto de la norma un párrafo completo en donde se usó “prisión preventiva”, llevando con ello alguna otra cantidad de derechos fundamentales y diferenciadores en ese tipo de procedimientos, se causaría un daño a esta justicia, que es total y absolutamente diferenciada de la de los adultos.

Por eso creo, entonces, que mediante un ejercicio de interpretación conforme, tendríamos que decir que toda expresión “prisión preventiva” equivale a la medida de internamiento autorizada por la propia Constitución y, con ello, no prescindir, —por virtud del fallo— de otros derechos asociados a la mala técnica de la legislación, en donde, usando “prisión preventiva”, los vinculó.

Por esa razón, entonces, hoy aprovechando que el tema se subió a la discusión, me pronuncio a favor de considerar que el internamiento es permitido por la Constitución, y no porque ello suceda, tendrían que desaparecer todas las disposiciones que

utilizan la expresión “prisión preventiva”, pues el costo sería bastante mayor al cancelar derechos que vienen asociados a esta mala técnica, que bien podemos superar en el entendimiento de que una y otra son equivalentes. Gracias señor Ministro Presidente.

SEÑOR MINISTRO PRESIDENTE: Gracias señor Ministro. ¿Alguna otra intervención? Si me permiten, voy a expresar mi voto también. Estoy de acuerdo sustancialmente con el proyecto del señor Ministro Franco, también disiento del tercero de los apartados —del C—, también considero que es posible que exista esta medida de internamiento provisional como medida cautelar; en primer lugar, como una interpretación del artículo 18 constitucional, puedo inclusive convenir con eso, porque tampoco me convence mucho que la disposición del artículo 18 constitucional sea aplicable para estas medidas cautelares, pero haciendo el mismo análisis que hace el proyecto en este sentido, coincido que el artículo 18 constitucional no lo prohíbe, prevé una forma de internamiento provisional dentro del párrafo que tiene una referencia a las medidas concretas para adolescentes.

Coincido en que, en primer lugar, no existe una prohibición expresa del internamiento; en segundo lugar, que, por el contrario, —de alguna manera— permite un internamiento cuando se trate de unas condiciones extremas, que así lo justifiquen, y lo cual puede coincidir con la Convención sobre los Derechos del Niño, en su artículo 37, inciso b), que también hace referencia a eso y lo prevé de una manera muy semejante a como se ha interpretado el artículo 18 constitucional.

De esta manera, creo que si se están tomando en consideración estos elementos, de que se puede imponer una medida cautelar de esta naturaleza con un internamiento preventivo, que

solamente se pueda hacer en materia de extrema necesidad por la calidad de los delitos, y buscando los tres objetivos que se señalaron en el artículo 120 de la ley: la presencia del adolescente, la continuación del procedimiento y –especialmente diría, resaltadamente– la protección de las víctimas y de la sociedad, pero especialmente de las víctimas. En ese sentido, coincido que el sistema podría embonarse con los artículos 19 y 20 constitucionales.

Más allá, –todavía– consideraría que el artículo 18 no es exactamente aplicable a las medidas cautelares, lo entiendo en la parte final, y leo: “El internamiento se utilizará sólo como medida extrema y por el tiempo más breve que proceda, y podrá aplicarse únicamente a los adolescentes mayores de catorce años de edad, por la comisión o participación en un hecho que la ley señale como delito”.

Para mí, –y así lo entiendo– cuando está definida la comisión o participación del adolescente, de tal modo que esta determinación está relacionada con la sentencia, no con una medida cautelar. No existiendo tal limitación, entonces, se aplicarían los principios de los artículos 19 y 20 y, por lo tanto, se justificaría plenamente –también, desde este otro punto de vista– el internamiento preventivo.

Quisiera solamente decir –para no reiterar lo que se ha dicho mucho– que estoy convencido de que esta medida no es atentatoria de los adolescentes, por el contrario, se toman medidas muy extremas, cuando –en la realidad– no se ha demostrado que hay –en ocasiones– adolescentes que tienen una condición que debe tratarse de una manera especial para el cuidado de la sociedad y de las víctimas y, por lo tanto, coincido

en que nuestra Constitución permite sistemáticamente la aplicación de esta medida.

También difiero de la última parte, en cuanto a que puedo ver que hay una similitud o una utilización sinónima de internamiento preventivo con la prisión preventiva; de tal manera que no estaría por la invalidez de esas determinaciones, sino por reconocer – junto con la posibilidad de que se pueda imponer– la constitucionalidad también de esas normas, entendiendo que, cuando se habla de ello, se está hablando de internamiento preventivo.

De esta manera, emitiré mi voto en este sentido, excepto con la última parte de la propuesta. Señor Ministro Cossío.

SEÑOR MINISTRO COSSÍO DÍAZ: Gracias señor Ministro Presidente. Creo que la votación está muy clara, me parece también que el problema que se ha presentado en los distintos enfoques. A estas alturas, creo que no tiene ningún sentido tratar de convencer a nadie, simplemente voy a explicar mi posición con pleno respeto a la de los demás.

Lo que entiendo: el sistema de justicia para adolescentes, que se creó con reforma constitucional, pretendió crear un sistema autónomo al resto del sistema penal, y éste me parece que es un punto importante. Creo que –entonces– no resultan intercambiables piezas del 18, del 19 y del 20, en términos constitucionales.

El asunto que observo es que –precisamente–, en este párrafo sexto del artículo 18, me parece que se hace una acotación puntual a la situación del internamiento, y el internamiento sólo tiene como función, primero, una condición excepcional, una

condición extrema, y me parece que se refiere a la condición de la sentencia.

Si el artículo 18 en su párrafo sexto maneja la condición del internamiento, me parece –entonces– que no pueden acomodársele piezas –voy a usar esta metáfora– como si se tratara de algo en el cual puede ser relleno con preceptos, con contenidos de los artículos 19 y 20; creo que se puede rellenar, – y algunos de los compañeros lo han hecho, y me parece muy bien– el caso de la flagrancia es bastante claro, porque ahí nos está mencionando la condición de la flagrancia.

Creo que la mención expresa en el párrafo sexto del artículo 18, lo que hace es excluir otras posibilidades de agregación –y es así como lo observo–, y creo que esto es precisamente lo que satisface, lo que garantiza la existencia de un sistema que pretende ser integral, y me parece que pretende ser autónomo.

¿Por qué algunos conceptos –que los han dicho en las distintas intervenciones– son correctos? Porque no están excluidos, porque no tienen una denominación expresa. Cuando se habla del internamiento, me parece que ahí hay una condición que excluye al resto de las condiciones. Este me parece que es un asunto importante.

El segundo que me importa mucho destacar es la condición de las víctimas, de los ofendidos dentro del proceso penal, ¿cómo se garantiza –de acuerdo con mi lectura de la Constitución– la condición de víctima y ofendidos? ¿Poniendo en prisión preventiva a adolescentes que pueden tener la condición de sujetos peligrosos? Creo que no, creo que el Constituyente lo previó con bastante claridad en el segundo párrafo de la fracción V, del apartado C, del artículo 20, cuando dice: “El Ministerio

Público deberá garantizar la protección de víctimas, ofendidos, testigos y en general todas los sujetos que intervengan en el proceso. Los jueces deberán vigilar el buen cumplimiento de esta obligación”. Es decir, creo que la sociedad, de acuerdo con el modelo constitucional y, más allá de una política pública que fuera correcta o no, que introdujo el Constituyente, me parece que garantiza protegiendo a las víctimas y no sometiendo a prisión, así sea esta preventiva, a las personas que están dadas.

Creo –entonces– que el artículo 18 hay que leerlo en su estructura, creo que, al tener contenido específico, hace refractario a otros contenidos constitucionales, permite la adición de contenidos constitucionales, ahí donde no hay mención, y éste me parece que es lo que sucede con el caso de la medida extrema.

Estando en esta posición, y habiéndosenos sometido a votación y a discusión el considerando quinto completo, estaría en contra de él en su totalidad, creo que la forma de diferenciación de los temas no es la adecuada; creo que el problema central es si el sistema, en lo relacionado con el internamiento, como medida preventiva en los adolescentes, es o no es constitucional. Desde ese punto de vista, votaré en contra del considerando quinto en su integridad. Gracias señor Ministro Presidente.

SEÑOR MINISTRO PRESIDENTE: Gracias señor Ministro. ¿Algún dato más señor Ministro ponente? Para tomar la votación.

SEÑOR MINISTRO FRANCO GONZÁLEZ SALAS: Sí señor Ministro Presidente. Tengo que posicionarme rápidamente para que se puedan expresar, no sé si haya algún otro Ministro que

quiera expresar su opinión para poder plantear al Pleno en qué estaría dispuesto a modificar el proyecto y en qué no.

En primer lugar, agradezco muchísimo tanto los argumentos a favor o en contra que se han vertido sobre el proyecto, porque –evidentemente– nutren, y como siempre lo he dicho, creo que la obligación es estar abierto a escucharlos y –eventualmente– replantearse las cosas.

Voy ir por apartados para hacerlo más simple, señor Presidente. En el apartado en que se hace cargo el proyecto del primer concepto de invalidez de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, entiendo que no ha habido –salvo quienes se han pronunciado en contra del proyecto de manera integral que, por los demás– una objeción.

En cuanto al internamiento preventivo. El proyecto se hace cargo, –si lo ven– y ofrezco introducir mucho de los argumentos adicionales que se dieron de la vinculación que existe entre esta parte del artículo 18, no tengo inconveniente en abordarlo así, pero en la parte específica que se refiere a la justicia para adolescentes, con los artículos 19 y 20, los menciona expresamente. Con mucho gusto ofrezco reforzar la argumentación que hay, conforme a lo que aquí se ha dicho por la señora y por los señores Ministros que tocaron este punto especial, para tratar de armar todo el argumento con esto porque creo que lo refuerza.

Simplemente quiero especificar algunas cosas que quizás valga la pena, también en el proyecto, adicionarlo. Desde el primer documento legislativo –no ejecutivo–, en respuesta a las iniciativas que se presentaron, que fue el dictamen de origen de la Cámara Senadores de treinta y uno de marzo de dos mil cinco,

que —precisamente— introdujo esta porción normativa, materia de la discusión y —por supuesto— de la impugnación de la comisión, se señaló expresamente en uno de sus párrafos: “Por último, se introduce la limitación de la utilización de la privación de la libertad”. En este momento todavía se utilizaba el concepto de privación de la libertad de manera genérica para la justicia de adolescentes. Repito: “Por último, se introduce la limitación de la utilización de la privación de la libertad, ya sea como sanción, o como medida cautelar. Se considera que los adolescentes, debido a la temprana etapa de desarrollo en que se encuentran, son especialmente vulnerables a los efectos negativos de la privación de la libertad”. Y luego explica todo lo que aquí se ha comentado y que —obviamente— tendría que ser una medida extrema.

También se modificó el concepto de sanción por el de medidas. ¿Qué quiere decir con esto? Que —al menos, como lo dije desde mi primera intervención— debemos reconocer que hay elementos para interpretar el texto constitucional, en el sentido de que nunca prohibió el que hubiera —precisamente— en el internamiento preventivo, y la única mención expresa que encontramos al revisar —de nueva cuenta— todos los trabajos legislativos, específicamente al tema que abordamos, es este párrafo del primer dictamen de la Cámara de Senadores. Y creo que eso es importante porque refuerza lo que aquí se ha dicho.

Consecuentemente, también ofrezco —en esta parte— incorporar algunos de los argumentos adicionales que se han dado en refuerzo de la constitucionalidad del internamiento preventivo. Creo que es muy importante incorporar —precisamente— el párrafo de la Observación General No. 10 que leyó el Ministro Zaldívar, que —en mi opinión, también visto desde el ángulo de quienes sostenemos la constitucionalidad— lo refuerza de manera

importante en cuanto a la visión de convencionalidad. Sé que alguna y algunos señores Ministros no convienen del todo, pero me parece que —en este caso— era obligado, dado que parte del supuesto de que la Constitución lo acepta, introducir también lo que refuerza el proyecto en tanto a convencionalidad puesto que acredita que, también en materia de los documentos internacionales de derechos humanos, está aceptada la posibilidad del internamiento preventivo.

Finalmente, respecto del tercer apartado, —por supuesto— ofrezco elaborar el engrose con base en lo que es un criterio, pues diría cuasi mayoritario, no sé exactamente cómo quedara la votación final, pero es evidente que la mayoría de los Ministros que han participado se han pronunciado porque no se debe invalidar las porciones que hablan de prisión preventiva.

Debo señalar que esto, y sigo convencido de que hay elementos para hacerlo así, porque obedece a que estamos en materia penal y que —precisamente— la intención del Constituyente y del legislador evidente, era no hablar de prisión preventiva para el ámbito penal de los adolescentes y, por las razones que hayan ocurrido durante las discusiones y el debate, dejaron muchas referencias que venían desde el principio de la iniciativa; pero ofrezco elaborar el proyecto en el sentido en que se han pronunciado varios de los señores Ministros: de que debe entenderse, y entiendo que aquí tenemos que hacer una interpretación conforme, puesto que la sistemática no entiendo cómo podríamos armarla, una interpretación conforme; de que cuando se hable de prisión preventiva debe entenderse a la figura de internamiento preventivo, que es —precisamente— la que se creó para la justicia penal de adolescentes, y elaboraré un voto concurrente en este punto. Consecuentemente, esto es lo

que aceptaría de las propuestas que se han hecho, señor Ministro Presidente.

SEÑOR MINISTRO PRESIDENTE: Muchas gracias señor Ministro. Señor Ministro Pérez Dayán.

SEÑOR MINISTRO PÉREZ DAYÁN: Gracias señor Ministro Presidente. Seré muy breve, dado que la construcción de mi argumento participó mucho de la razón de la víctima, y el señor Ministro Cossío –con un cuidado y articulación muy completas– expresó alguna forma de entendimiento de cómo la víctima también puede ser protegida, y no necesariamente con un sistema de internamiento preventivo.

En efecto, el señor Ministro Cossío ha sustentado su posición en que la prisión preventiva no puede tener un equivalente a los adolescentes y, por tanto, congruente con su posición, –como son todas sus intervenciones– considera que el tema de la víctima podría estar asegurado en otro apartado; pero para quienes consideramos que tiene un equivalente la prisión preventiva, denominada como “internamiento”, –no sé– es –por lo menos para mí– muy útil el artículo 19, segundo párrafo, en donde a la víctima le da –como condición– una participación sumamente importante y un componente integral de la prisión preventiva para los adultos o internamiento preventivo para los adolescentes, pues dice: “El Ministerio Público sólo podrá solicitar al juez la prisión preventiva cuando otras medidas cautelares no sean suficientes para garantizar la comparecencia del imputado en el juicio, el desarrollo de la investigación, la protección de la víctima, de los testigos o de la comunidad,” etcétera.

Creo, entonces, que el Constituyente tuvo en cuenta como un componente fundamental, en el tema de la prisión preventiva o el

internamiento, como muchos lo consideramos, incluido ese tópico expreso: la protección de la víctima y de la sociedad.

Por ello, –entonces– creo que dentro de los formatos de protección encargados al ministerio público está el del internamiento preventivo, en función de la protección de la víctima.

SEÑOR MINISTRO PRESIDENTE: Gracias señor Ministro. Vamos a tomar la votación entonces. Les pediría que hiciéramos –y creo que no tardaríamos mucho– dos votaciones: Primero, por los apartados A y B –o los dos primeros apartados del considerando quinto– y luego, uno por el considerando quinto, apartado C, respecto de la posibilidad de entender como sinónimos los conceptos que ahí se manejan.

Quiero comentar que, previamente, el señor Ministro Gutiérrez Ortiz Mena me informó que no podía pronunciarse –está afónico– y que el señor Ministro Cossío hará el favor de señalar su voto con toda autenticidad.

Tome la primera votación, entonces, señor secretario.

SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS: Sí señor Ministro Presidente.

SEÑOR MINISTRO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA: Estoy a favor del proyecto original, por la invalidez de las porciones que se señalan, y anuncio un voto concurrente.

SEÑOR MINISTRO COSSÍO DÍAZ: Estoy en contra de los dos puntos que se están sometiendo, de hecho, estoy en contra de todo el considerando quinto, creo que son inválidos ambos preceptos impugnados y tratados aquí. Nada más. En contra.

SEÑORA MINISTRA LUNA RAMOS: Nada más quería hacer una aclaración. El apartado C, había entendido que lo cambiaba, ¿no?

SEÑOR MINISTRO PRESIDENTE: Sí.

SEÑOR MINISTRO FRANCO GONZÁLEZ SALAS: Que lo engrosaba.

SEÑORA MINISTRA LUNA RAMOS: Que lo engrosaba.

SEÑOR MINISTRO PRESIDENTE: Que lo engrosaba distinto.

SEÑORA MINISTRA LUNA RAMOS: Diciendo que es constitucional todo.

SEÑOR MINISTRO PRESIDENTE: Sí.

SEÑOR MINISTRO FRANCO GONZÁLEZ SALAS: Haciendo la interpretación.

SEÑORA MINISTRA LUNA RAMOS: Muy bien. Estoy por la constitucionalidad de los argumentos de los tres apartados y, en todo caso, reservándome el derecho de formular un voto concurrente.

SEÑOR MINISTRO PRESIDENTE: A ver. Entonces –con todo respeto, y con la intervención y el voto de la señora Ministra, y con el cambio –desde luego– que hizo el señor Ministro Franco, pues entonces reconsidero la petición hacia ustedes de que votemos todo el considerando quinto, en su integridad, para no necesariamente distinguir el último de sus apartados.

SEÑORA MINISTRA LUNA RAMOS: Perdón, metí el desorden.

SEÑOR MINISTRO PRESIDENTE: Reinicie la votación, señor secretario.

SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS: Sí señor Ministro Presidente.

SEÑOR MINISTRO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA: Estoy con el proyecto original, por la invalidez parcial de los preceptos, y me separo de las consideraciones. Asimismo, anuncio un voto concurrente.

SEÑOR MINISTRO COSSÍO DÍAZ: Estoy en contra del considerando quinto, en su totalidad, y anuncio un voto particular, por la invalidez de los preceptos.

SEÑORA MINISTRA LUNA RAMOS: Por la constitucionalidad, reservándome voto concurrente hasta ver el engrose.

SEÑOR MINISTRO FRANCO GONZÁLEZ SALAS: Voto con el proyecto modificado en el considerando quinto, en el entendido que haré voto concurrente para expresar las razones por las cuales se presentó en los términos de la inconstitucionalidad de la prisión preventiva.

SEÑOR MINISTRO ZALDÍVAR LELO DE LARREA: En contra de todo el considerando, por la invalidez y anuncio voto particular.

SEÑOR MINISTRO PARDO REBOLLEDO: A favor del proyecto modificado, porque entiendo que ahora establece lo infundado de los conceptos de invalidez respecto de los tres temas, y también me reservaría un voto concurrente.

SEÑORA MINISTRA PIÑA HERNÁNDEZ: En contra del considerando quinto, por la inconstitucionalidad de los preceptos impugnados y, por lo tanto, por su invalidez, y formularé voto particular.

SEÑOR MINISTRO MEDINA MORA I.: En favor del proyecto modificado.

SEÑOR MINISTRO LAYNEZ POTISEK: Con el proyecto modificado.

SEÑOR MINISTRO PÉREZ DAYÁN: Con el proyecto modificado, en tanto que el señor Ministro ponente ha aceptado incorporar los argumentos que se dieron en favor de su proyecto.

SEÑOR MINISTRO PRESIDENTE AGUILAR MORALES: Con el proyecto modificado y voy a formular voto concurrente.

SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS: Señor Ministro Presidente, me permito informar que existe mayoría de ocho votos a favor de la propuesta modificada del proyecto, con voto en contra de consideraciones del señor Ministro Gutiérrez Ortiz Mena, quien incluso está a favor del apartado C en su versión original; hay anuncio de reserva de voto concurrente de los señores Ministros Luna Ramos y Pardo Rebolledo; anuncio de voto concurrente de los señores Ministros Franco González Salas y Presidente Aguilar Morales; y voto en contra y por la invalidez de los preceptos de los señores Ministros Cossío Díaz, Zaldívar Lelo de Larrea y Piña Hernández, los dos últimos anuncian voto particular, también el Ministro Cossío.

SEÑOR MINISTRO PRESIDENTE: CON ESA VOTACIÓN, QUEDA APROBADO EL CONSIDERANDO QUINTO DE ESTA PROPUESTA.

Y dado lo avanzado de la hora, voy a levantar la sesión, ya que tenemos una privada a continuación; seguiremos en la sesión el día de mañana –a la cual los convoco– con el considerando sexto, que también toca un tema relevante respecto de lo que la ley señala como resguardo domiciliario de los adolescentes. Se levanta la sesión.

(SE LEVANTÓ LA SESIÓN A LAS 13:10 HORAS)